

OFI24-00003965

Bogotá D.C. viernes, 26 de enero de 2024

Doctor

LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO

Representante a la Cámara

luis.alban@camara.gov.co

Edificio Nuevo del Congreso

Carrera 7 # 8 - 68

E.S.D.

Asunto: Respuesta al Derecho de Petición – RADICADOS INTERNOS
EXT23-00151115 y EXT23-00152392.

Honorable Representante a la Cámara Albán, reciba un cordial saludo.

La Unidad Nacional de Protección, en adelante UNP, recibió las peticiones con radicados No. EXT23-00151115 y EXT23-00152392 relacionadas en el asunto, por medio de las cuales el Ministerio del Interior trasladó uno de los interrogantes de la Proposición N° 008 que fue presentada por el Honorable Representante a la Cámara Luis Alberto Albán Urbano, que indaga por las “*garantías de seguridad para los firmantes de paz, líderes y lideresas sociales en el marco de la paz total*”. En consecuencia, nos complace brindar respuesta en los siguientes términos:

“(…) En el marco de las funciones establecidas en artículo 11 del Decreto 2124 de 2017:

- 1. ¿Cuántas situaciones de riesgos y amenazas contra líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y personas y colectivos en proceso de reincorporación se han reportado durante el 2023? Desglosar por tipo de riesgo y amenaza, género, año, municipio y número de personas afectadas”. (…)***

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe denominado “*Análisis de la situación de derechos humanos en Colombia*” del mes de agosto de 2023 señaló que las situaciones de riesgos y amenazas en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos y colectivos en proceso de reincorporación, reportados durante el primer semestre del 2023, son los siguientes:

1. Continua expansión territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
2. Incremento de acciones de control social con un impacto negativo en la situación de Derechos Humanos de la población civil e imposición de reglamentos de conducta por parte de los grupos armados no estatales y/o organizaciones criminales para controlar la vida social, económica y política de las comunidades, organizaciones sociales y étnico territoriales.
3. Alta cantidad de casos de reclutamiento infantil por parte de los actores armados no estatales y organizaciones criminales.

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-03 V1

4. Implementación por parte de los grupos armados no estatales de estrategias agresivas para desarticular a las organizaciones de la sociedad civil, cooptar sus espacios y/o suplantar los mismos.
5. Limitaciones derivadas del control y la violencia ejercidos por grupos armados no estatales para que las comunidades, especialmente las rurales y alejadas de los cascos urbanos, puedan informar sobre su situación y expresar sus necesidades.
6. Restricciones a la libertad de expresión de personas Defensoras de Derechos Humanos, Líderes, Líderesas y comunidades en los territorios.
7. Dinámicas de trata con fines de explotación sexual, así como violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales.

A su turno, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, informó que en el interregno del 01 de enero y el 28 de diciembre de 2023 han sido asesinadas **188** personas que ejercían algún tipo de liderazgo o defensa de Derechos Humanos en Colombia.

En este punto, resulta importante contextualizar que la UNP opera en el marco de las atribuciones legales establecidas en el Decreto 4065 de 2011; por consiguiente, nuestro principal propósito es coordinar y ejecutar la prestación de servicios de protección en virtud del ejercicio de un cargo público a individuos determinados por el Gobierno Nacional o en su defecto a personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal en el ejercicio de actividades políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas o de género.

Para su ejecución la UNP desarrolla las Políticas Públicas de Prevención y Protección, a través de la coordinación de los siguientes Programas: (i) Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades; (ii) Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano; (iii) Programa Especial de Protección Especializada (Programa derivado del Acuerdo de Paz). Cada uno de estos programas define su población objeto y establece la asignación de medidas de protección, siempre y cuando el solicitante o beneficiario presente un nivel de riesgo extraordinario o extremo y que dicho riesgo sea conexo a la condición poblacional, por la cual se vincula al programa, la cual se encuentra determinada en su correspondiente marco normativo.

Respecto al Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de grupos y comunidades, regulado en el artículo 2.4.1.2.1 y siguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1066 de 2015, se debe explicar que éste se caracteriza por clasificar la **Ruta de Protección Individual** que radica en la protección de *personas* en el ejercicio de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias que pertenezcan a alguna de las poblaciones objeto de la entidad, consagradas en los artículos 2.4.1.2.6 y 2.4.1.2.7 del citado Decreto; y la **Ruta de Protección Colectiva** que está dirigida a *grupos, comunidades, resguardos y organizaciones sociales* que pertenezcan a una de las poblaciones objeto enunciadas en los numerales 1 al 15 del artículo 2.4.1.2.6 ibidem, determinadas a partir de un reconocimiento jurídico o social.

En el marco del Programa reseñado anteriormente en el año 2020, se consideró necesario categorizar las tipologías de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos para la Entidad, obteniendo como logro la identificación de las poblaciones señaladas en los numerales 1, 2, 3, 5, 8, 9.4, 9.5, 10, 13 y 14 del artículo 2.4.1.2.6 del Decreto Único Reglamentario 1066 del 2015, en cumplimiento de las competencias de la Subdirección de Protección de la UNP, en coordinación con las Consejerías Presidenciales de Derechos Humanos y Cumplimiento, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de las Naciones Unidas y la Subdirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, las cuales se precisan de manera taxativa así:

- (...) 1. Dirigentes o activistas de grupos políticos; y directivos y miembros de organizaciones políticas, declaradas en oposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1909 de 2018 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.*
- 2. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o de campesinos.*
- 3. Dirigentes o activistas sindicales.*
- 5. Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos.*
- 8. Periodistas y comunicadores sociales.*
- 9.4. Dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población desplazada.*
- 9.5. Dirigentes, líderes, representantes de organizaciones reclamantes de tierras*
- 10. Servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos y paz del Gobierno nacional.*
- 13. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o disciplinarios por violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.*
- 14. Docentes de acuerdo con la definición estipulada en la Resolución 1240 de 2010, o la normativa que la modifique, adicione o sustituya, sin perjuicio de las responsabilidades de protección del Ministerio de Educación estipuladas en la misma. (...)"*

A su turno, el Grupo de Análisis Estratégico Poblacional (GAEP) adscrito a la Subdirección de Evaluación del Riesgo, competente para consolidar información relacionada con presuntas amenazas de los beneficiarios del Programa de Prevención y Protección; mediante correo electrónico del 22 de noviembre de 2023 indicó que, de conformidad al seguimiento de las solicitudes de protección atendidas por la UNP desde el 01 de enero de 2023 al 06 de noviembre de 2023, el incremento de las **amenazas** contra los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos ha aumentado en un **22%**, las cuales han sido constantes en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Norte de Santander, caracterizadas por la intimidación psicológica del beneficiario, su núcleo y entorno familiar.

Ahora bien, con relación a las causas de amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos podemos señalar que obedecen a:

1. Su visibilidad en el ejercicio propio de liderar diferentes causas, resultan ser objetivos de Grupos Armados Organizados, "*grupos de poder*", o actores que se sienten amenazados en sus intereses propios, los cuales principalmente se relacionan con el poder económico, social y político.
2. Su desempeño como líder social o defensor de derechos humanos de denunciar las acciones ilegales de los diversos actores amenazantes.

3. La participación de la población en actividades de expresión social, en desarrollo de las políticas de Gobierno, ha fomentado la intervención de nuevos líderes sociales o defensores de derechos humanos.

Desde su competencia, la Subdirección de Evaluación del Riesgo mediante correo electrónico del 24 de enero de 2024, indicó que desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 se activaron **6.538** estudios del nivel del riesgo a favor de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de las cuales **1.061** se inactivaron y **3.834** se presentaron al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para su validación.

TABLA N° 1 – ESTUDIOS DEL NIVEL DEL RIESGO DURANTE EL AÑO 2023			
ORDENES ACTIVAS	ORDENES INACTIVAS	ORDENES PRESENTADAS A CERREM	TOTAL DE ORDENES
1643	1061	3834	6538
Fuente: Subdirección de Evaluación del Riesgo. Fecha de corte: 24 de enero de 2024.			

A su vez, mediante correo electrónico del 26 de enero de 2024 el Cuerpo Técnico de Análisis del Riesgo – Ruta de Protección Colectiva adscrito a la Subdirección de Evaluación del Riesgo indicó que, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, se activaron **179** estudios del nivel del riesgo a favor de Colectivos y/o Resguardos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Ahora, de conformidad a lo consagrado en el artículo 2.4.1.2.9 del Decreto Único Reglamentario 1066 del 2015 en casos de riesgo inminente y excepcional, el Director General de la UNP puede adoptar, sin necesidad de la evaluación del riesgo, medidas provisionales de protección para los usuarios del programa e informará de las mismas al CERREM en la siguiente sesión, con el fin de que este recomiende las medidas definitivas, de ser el caso. Por consiguiente, la Subdirección de Evaluación del Riesgo informó mediante correo electrónico del 25 de enero de 2024, que desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 se gestionaron **116** trámites de emergencia, a favor de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

En relación con las evaluaciones del riesgo individuales que han sido aprobadas se adjunta, el documento denominado "Anexo N° 1 – Evaluaciones del Nivel del Riesgo Individuales, a favor de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos" en el cual se clasifica la información por género, municipio y número de personas afectadas, departamento y municipio, durante el año 2023.

Por su parte se informa que brindar la información detallada de las evaluaciones de riesgo de los Colectivos, y de los Trámites de Emergencia vulnera el principio de reserva de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 2.4.1.2.2, numeral 13 del artículo 2.4.1.3.2 y numeral 15 del 2.4.1.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1066 del 2015 adicionado y modificado, lo que implica que la obligación de reserva de la información relativa a solicitantes y protegidos de los programas liderados por la UNP es aplicable tanto a los funcionarios que la conozcan como a los beneficiarios de las medidas y por ende esta información no debe formar parte de documentos que sean de acceso público.

Ahora, es imperativo señalar que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016 creó en el punto 3.4.7.4 el Programa de Protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) a la legalidad; así como, a las y los antiguos integrantes

del citado movimiento o partido político que se reincorporará a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo; motivo por el cual, en los puntos 3.4.7.4.1 y 3.4.7.5.2 del mencionado Acuerdo se creó la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, dependencias que tienen como propósito proteger de manera individual o colectiva a dicha población.

El Acuerdo Final de Paz diseñó una Política de Reincorporación que abarca un conjunto de aspectos importantes libre de discriminaciones y estigmatizaciones que faciliten el relacionamiento con las demás personas y con la comunidad. No obstante, la población firmante enfrenta graves riesgos que se proyectan negativamente sobre sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, seguridad y paz; afectando los procesos políticos, sociales, económicos y culturales que permitirían una efectiva reincorporación.

Lo anterior, evidenciado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU - 020 de 2022, cuando indicó que pese a todas las acciones impartidas por el Gobierno Nacional, en la práctica persiste la estigmatización, los conflictos territoriales y las rencillas contra estas personas, que en otro momento estuvieron alzadas en armas. Situación que se reflejó en el informe anual de violencia en Colombia, presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, señalando que para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 de diciembre de 2023 fueron asesinados **44** firmantes del acuerdo de paz.




Finalmente, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección mediante correo electrónico del 28 de noviembre de 2023, manifestó que, durante el año 2023 activó **668** estudios del nivel del riesgo individuales y **54** estudios del nivel del riesgo colectivas a favor de personas reincorporadas. Las mismas se discriminan por género, municipio y número de personas afectadas, se adjunta el documento denominado "*Anexo N° 2 – Evaluaciones del Nivel del Riesgo Individuales y Colectivas a favor de Personas en Reincorporación*".

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada y refrendamos nuestra firme disposición en resolver las inquietudes que frente al tema se puedan presentar.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMÍREZ
Asesor de Despacho de la Dirección General

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Claudia Marcela Guerrero Briceño		26 de enero de 2024
	Maura María Piscioti Cordero		
Revisó	Luis Eduardo Saavedra Ramírez		26 de enero de 2024
Aprobó	Luis Eduardo Saavedra Ramírez		26 de enero de 2024

Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

